

Santiago, treinta de mayo de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

En causa **RUC 2100531600-3, RIT N° 219-2022**, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, por sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, condenó a los acusados, **Marta de las Mercedes Villalobos González**, a la pena **de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 10 UTM** y accesorias legales, como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000 y; a **Jorge Humberto Hernández Montecino**, a la pena **de quinientos cuarenta y un día de presidio menor en su grado medio, multa de 10 UTM** y accesorias legales, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000. Hechos perpetrados con fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la ciudad de Chillán.

En contra de la referida decisión, las defensas de los acusados interpusieron recursos de nulidad, los que fueron conocidos en la audiencia pública celebrada el día doce de mayo último, conforme a la certificación estampada.

**Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurso de nulidad entablado por la defensa de la acusada Villalobos González se fundó en dos causales, la primera de ellas, en carácter de principal y la otra de forma subsidiaria.

La primera de ellas, la contenida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 25 de la Ley N°20.000 y lo prescrito en los artículos 83, 84, 180, 206, 227 y 228 del Código Procesal Penal.

Refiere que la infracción se presenta con ocasión de las diligencias realizadas por Carabineros en una investigación por el delito de tráfico sustancias ilícitas por parte de los moradores del domicilio ubicado en Rolando Alarcón 935 de Chillán, lo que motiva la disposición de vigilancias discretas por parte de



funcionarios policiales, para luego utilizarse la herramienta del agente revelador, la que se dispone de manera ilegal, ya que si bien, el Fiscal autoriza el uso de dicha herramienta, no realiza la designación específica del funcionario policial que debe cumplir dicho rol, recayendo dicha determinación en el mando de la unidad policial, cuestión que infringe la normativa atinente, la que debido a su carácter excepcional, debe interpretarse de manera restrictiva.

Tal ilegalidad, no sólo genera el reproche a la referida actuación, sino que en forma subsecuente, la de los medios de prueba que de ella emanen, no pudiendo ser considerados en el decisorio, como finalmente ocurrió, vulnerándose de esta manera, el debido proceso.

Con base en lo detallado, solicita se anule el juicio oral y la sentencia condenatoria a que dio lugar, debiendo llevarse a cabo un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura los medios de prueba que detalla.

En subsidio de la causal principal, plantea la prevista en el artículo 374 letra e) en relación con los artículos 342 y 297 del Código Procesal Penal.

Expone que la teoría desplegada en juicio por la Defensa, fue la falta de participación, relevando que la prueba incorporada no daba cuenta de la comisión de un ilícito por parte de la encartada, sino que a una actividad ilícita realizada por el coimputado en desconocimiento de ella, por lo que invoca la declaración de aquel, quien reconoce que la droga encontrada en el inmueble le pertenecía y quien se dedicaba al tráfico, era él, de manera oculta a la coimputada.

Pese a este contexto y la insuficiencia probatoria denunciada, refiere que el tribunal no se hace cargo de la hipótesis alternativa expuesta y las razones por las que la desestima.

Advierte además, que el tribunal para acreditar la participación de la encartada echo mano a un informe pericial que no figuraba como prueba de descargo, sino que fue incorporado con motivo de la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal.



Conforme a lo expuesto, solicita se anule el juicio oral y la sentencia, debiendo llevarse a cabo un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado

**SEGUNDO:** Que, la defensa del encartado Hernández Montecinos, por su parte, sostuvo recurso de nulidad basado en causal única, la que se corresponde a la causal de nulidad principal invocada por la coimputada, razón por la que se dan por reproducidas las alegaciones al efecto, al igual que su petitorio.

**TERCERO:** Que, los hechos que se han tenido por establecidos por los sentenciadores del grado constan en la motivación décima del fallo que se impugna, al siguiente tenor: *““El día 21 de julio de 2021 en base a una investigación del OS 7 y la fiscalía, se pudo determinar que Marta Villalobos González y Jorge Hernández Montecino, en su domicilio ubicado en Rolando Alarcón Nro. 935, población Nueva Río Viejo, Chillan, vendían drogas; y usando a un agente revelador autorizado, éste concurrió al mencionado domicilio, lugar en el cual Hernández Montecino, le vendió 5 envoltorios con 0.9 gramos de pasta base de cocaína en \$10.000; luego en cumplimiento de una orden judicial de entrada registro e incautación, se ingresó el día 22 de julio de 2021 a dicho domicilio siendo detenida la acusada Villalobos González, quien se encontraba en posesión sin autorización y con fines de comercialización de 253 envoltorios con 49.8 gramos de pasta base de cocaína, \$31.470 y \$50.550 en dinero en efectivo, provenientes del tráfico ilícito, no logrando ser detenido en el lugar Hernández Montecino”.*

Hechos que fueron calificados como constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, artículo 4 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000.

**CUARTO:** Que, en lo concerniente a la infracción denunciada en forma compartida por los recursos de nulidad deducidos por las defensas, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la



República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

**QUINTO:** Que, por su parte, frente a la alegación de ilegalidad en la implementación del agente revelador, el fallo en estudio la desestima, exponiendo en su razonamiento décimo tercero lo siguiente: *“...Al efecto la norma es claramente genérica, pues habla de funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes reveladores, y es lo que en el caso de marras se autorizó por el Ministerio Público en la orden de investigar, a las policías de carabineros de la OS 7, siendo el mando de tal unidad el que designó ya en forma específica cual de sus funcionarios iba a realizar dicha técnica. Y a mayor abundamiento, la norma señala que será a propuesta de los funcionarios de esas policías la persona que se desempeñará como agente revelador o encubierto, y según las reglas de interpretación de la ley del Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, y el artículo 20 del mismo cuerpo legal, indica que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Y en este caso el artículo 25 de la ley 20.000, es claro en su texto en señalar de manera genérica respecto de quienes se dará esta autorización por parte del Ministerio Público para actuar como agente revelador - “a funcionarios policiales” – por lo que basta que el fiscal*



*respectivo en su instrucción mencione si tal técnica será realizada por Carabineros o por Policía de Investigaciones, que serían los únicos funcionarios policiales facultados para desarrollar este tipo de diligencias, ya que son los cooperadores directos del ente persecutor en su tarea de investigar; asimismo la propia norma del artículo 25 permite que sea a propuesta de tales funcionarios, pues quién más calificada que la misma policía o unidad policial para designar al agente que desempeñará tal diligencia, por cuanto el respectivo mando de cada unidad conoce y adiestra a sus funcionarios para las diversas tareas o roles que deben desempeñar.*

*Así las cosas, es dable concluir que en el actuar del Ministerio Público y de las policías no hubo ni se generó condición alguna que pudiera vulnerar las garantías fundamentales de los acusados, ni en relación al debido proceso ni en cuanto a el ejercicio de sus derechos”.*

**SEXTO:** Que, para un adecuado análisis de la infracción denunciada, es necesario tener presente que las complejidades de las investigaciones sobre los ilícitos que regulan la Ley 20.000, han motivado la creación y regulación de diligencias investigativas específicas, dentro de las cuales se encuentran aquellas que suponen una intervención previa o simultánea a la comisión del ilícito, en las que tienen intervención funcionarios policiales.

Así, el artículo 25 de la citada ley, dispone que: *“El Ministerio Público podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores y, a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en alguna de las dos calidades anteriores”.* Acto seguido, aquella norma define al agente revelador de la siguiente manera: *“es el funcionario policial que simula ser comprador o adquirente, para sí o para terceros, de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de lograr la manifestación o incautación de la droga.”*

De lo anterior, se extrae como elementos necesarios para la utilización de esta herramienta investigativa, la existencia de una pesquisa de delitos vinculados



a la Ley 20.000, la decisión del Ministerio Público de la utilización de la figura del agente revelador y que su ejecución sea llevada a cabo por un funcionario policial que simule la adquisición de droga.

La denuncia que se plantea por parte de las defensas es que la designación concreta del funcionario policial que cumpliría la labor de agente revelador no fue llevada a cabo directamente por el Fiscal, sino que por la jefatura del grupo policial que participaba de las diligencias.

En efecto, cabe indicar, que tratándose de una actuación de investigación ésta queda supeditada a la dirección de Fiscalía, siendo dicho órgano, el único facultado para disponer la implementación de la figura en comento, quedando absolutamente vedado un actuar autónomo de los agentes policiales sobre este punto.

Luego, no resulta cuestionado ni debatido que, en el caso concreto, efectivamente fue un representante del ente persecutor, quien dispuso la utilización de un agente revelador, lo que fue comunicado al grupo policial operativo, razón por la cual, la decisión fue adoptada por la única autoridad facultada al efecto, no advirtiéndose ilegalidad alguna sobre dicha determinación.

Cuestión diversa, radica en como se materializa la instrucción brindada por el Fiscal, y al respecto, conforme la transcripción del artículo 25 en la parte pertinente, no se advierte que la determinación nominativa de quien cumplirá el rol de agente recaiga exclusivamente en el Fiscal, puesto que tratándose de una actuación operativa, son los agentes policiales que la implementaran, los que se encuentran en mejor posición de determinar quien de ellos o de una unidad policial diversa, reúne los requisitos para llevar a cabo de manera exitosa la asignación dispuesta por el Fiscal, toda vez que no puede dejarse de lado, en una adecuada interpretación de la norma que consagra al agente revelador, que se trata de un técnica destinada a obtener la manifestación de la comisión de un delito, en donde el funcionario que cumpla tal rol, no debe despertar dudas de su real motivación, ni sospechas en el blanco investigativo, que puedan frustrar su cumplimiento exitoso,



circunstancias que pueden ser apreciadas correctamente por la unidad policial a quien el Fiscal autorizó la implementación del agente.

Planteamientos que ya han sido sostenidos previamente por este Tribunal en roles 87.813-2016, 4889-2022.

**SÉPTIMO:** Que, da fuerza al razonamiento expuesto, la historia fidedigna del establecimiento de la ley, la que en su Mensaje N° 232-341 de 2 de diciembre de 1999 con el que se inicia la tramitación de la ley que finalmente sustituye a la Ley N° 19.366, al definirse tanto al agente encubierto como al agente revelador, se expresa que ambos corresponden al *“funcionario policial debidamente autorizado por sus superiores”* que realiza las actividades que luego describe.

Pues bien, la supresión durante la tramitación del proyecto de la expresión *“dεδbidamente autorizado por sus superiores”* tuvo por único objeto aclarar que tal permiso debe ser otorgado por el Ministerio Pùblico y no por las policías, lo que se conforma con que aquel ente tiene la exclusividad en la dirección de la investigación, pero sin con que con ello se buscase también que la nominación del funcionario que llevará adelante la diligencia sea efectuada por el Ministerio Pùblico. Es así como la indicación del Ejecutivo para eliminar la exigencia de anuencia del superior jerárquico policial se fundó en que en el nuevo sistema procesal penal, la única autoridad a la que le corresponde autorizar a este tipo de agentes es al Ministerio Pùblico, ya que *“a la policía sólo le cabe designar al funcionario que desempeñará dicha función”* (Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado).

**OCTAVO:** Que, conforme se viene razonando, en el procedimiento policial en estudio, se ha dado estricto cumplimiento a la reglamentación relativa al agente revelador, al existir la correspondiente autorización de su uso, por parte del Fiscal, como así también su cumplimiento por parte de funcionario policial, resultando descartadas las alegaciones formuladas por las defensas al efecto y la afectación al debido proceso que se estimaba emanaban de ellas.



Por último, cabe consignar que la información aportada por la agencia reveladora, no tan sólo fue registrada en la carpeta investigativa, sino que igualmente fue incorporada en el contradictorio, mediante los atestados del funcionario policial que dio cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio Público, permitiendo que la Defensa, realizara un completo ejercicio de sus facultades interrogatorias, como así también de control de la información que se incorpora, permitiendo, además, que el tribunal se impusiera directamente de sus circunstancias y realizara una adecuada ponderación de su mérito.

**NOVENO:** Que, en lo referente a la causal subsidiaria invocada por la Defensa de Villalobos González, la que se hace radicar en la falta de pronunciamiento acerca de la totalidad de las alegaciones, valga referir que sobre la participación de la encartada, el tribunal del grado expone en las motivaciones décimo segunda la prueba incorporada, la que conforma razona, da cuenta del inicio de la investigación motivada por la denuncia acerca que los moradores del inmueble ubicado en Rolando Alarcón 935 Chillán, se dedicaban al tráfico de drogas, el desarrollo de vigilancias discretas al inmueble en el que vivían los acusados, las dinámicas e interacciones advertidas, la manifestación del delito de tráfico obtenida por parte del coimputado, el ingreso al inmueble referido, previa orden emanada del Juzgado de Garantía y el hallazgo de droga y dinero en dicho inmueble.

Prueba y ponderación que lleva al Tribunal a desestimar expresamente, en su razonamiento décimo tercero, la teoría de falta de participación propuesta por la defensa de la encartada y sus sustentos, que la defensa hace recaer en un actuar policial motivado por una denuncia anónima en la que sólo se atribuye participación al acusado Hernández Montecino; la declaración del coacusado quién resta participación a la coimputada en los hechos, lo que refrenda por el lugar en que encontrada la droga; y en su lugar, le permiten concluir acerca de la encartada lo siguiente: *“Es así que la defensa señaló que si se suprime mental e hipotéticamente la droga encontrada oculta detrás de la lavadora en el domicilio*





*de los encartados, y no encuentran nada, a nadie detienen en ese día, y que se tomó detenida a doña Marta sólo porque en ese momento no estaba allí don Jorge y porque era el blanco que se denunciaba en una denuncia anónima,*

*Pues bien, al respecto es preciso aclarar que la prueba de cargo, en especial la testimonial, fue determinante para llegar al convencimiento de que Marta Villalobos también estaba involucrada en este delito de microtráfico, ya que por las diligencias de vigilancia discreta que policías del OS7 realizaron al domicilio de los encartados, les permitió observar este continuo tránsito de personas a dicho lugar, entrando y saliendo de aquel tanto doña Marta como don Jorge, y luego al realizar el allanamiento al día siguiente en un horario en que Jorge Hernández no se encontraba en el domicilio, encuentran a Marta Villalobos, la droga y el dinero que se incautó; además tal como se logró demostrar en juicio, tal domicilio es de propiedad de ambos acusados, los que habitan allí desde varios años según los propios dichos de Jorge Hernández y según el informe pericial social que la defensa incorporó para una pena sustitutiva. De tal suerte que no sólo se da por acreditada la participación de Marta Villalobos porque estaba en el domicilio al tiempo del registro, sino porque fue vista y observada por los policías en sus vigilancias al domicilio, como una de las vendedoras de droga, lo que concordaba con la denuncia que originó tal investigación”.*

**DÉCIMO:** Que, de acuerdo a la reciente transcripción, el tribunal realiza, fundadamente la desestimación de la hipótesis de falta de participación de doña Marta Villalobos, la que resulta desplazada por la fuerza probatoria de los medios incorporados por la Fiscalía que se detallan en extenso en el fallo, correspondiendo la alegación bajo estudio, a una discrepancia con la valoración realizada por el Tribunal y a las conclusiones que de ella extrae, ya que la protesta de nulidad no explica que principio o regla de la lógica habría sido vulnerado en la determinación de los hechos, sino que en base a elementos extractados provenientes de medios probatorios elegidos, se ofrece una valoración alternativa



de ellos y se expone en una conclusión favorable a su participación, cuestión que en ningún caso puede configurar la causal de nulidad que se invoca.

**UNDÉCIMO:** Que, sobre el uso de prueba no ofrecida en el auto de apertura de juicio oral para la determinación de la participación, alegación que se ancla en la utilización de un informe pericial incorporado una vez comunicado el veredicto condenatorio, debe recordarse el artículo 375 del Código Procesal Penal, y como esta Corte ha resuelto uniformemente, que el agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso.

Asimismo, esta Corte ha señalado que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente o de gravedad, de modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso. El principio de trascendencia, recogido por el artículo 375 en análisis a propósito de los defectos en la sentencia, supone necesariamente que el acto viciado afecte de manera significativa las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el proceso – lo cual se refiere a las conocidas locuciones “no hay nulidad sin perjuicio”, o “la nulidad sin perjuicio no opera” – no pudiendo ser subsanado el vicio de ninguna otra manera que no sea la declaración del acto como nulo.

**DUODÉCIMO:** Que, sobre la valoración de dicho documento, este resulta absolutamente intrascendente, ya que la información que de él se denuncia como extraída, corresponde a la singularización del domicilio de los encartados, antecedente que ya venía establecido desde la denuncia formulada, domicilio que luego fue verificado en terreno mediante las vigilancias discretas, en donde el fallo fórmula abundantes razonamientos acerca de la identidad de los ocupantes del inmueble objeto de observación y las conductas advertidas; información que luego es refrendada al momento del allanamiento practicado al domicilio, cuestiones todas que, permiten advertir la falta de relevancia en la determinación del domicilio de los acusados del documento cuestionado, desde que se trataría de un



antecedentes más sobre el punto y que incluso, no siendo valorado, la sentencia logra explicar sobrada y razonadamente, la determinación del domicilio de los encartados.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, de acuerdo a lo antes dicho, no resultaron por establecidas las reclamaciones de nulidad formuladas en los recursos de nulidad, lo que lleva a su completa desestimación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 391 del Código Penal; 297, 342, 373 letra a), 374 letra e), 384 y siguientes, 481 del Código Procesal Penal, se resuelve que; **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los acusados **Marta de las Mercedes Villalobos González y Jorge Humberto Hernández Montecino**, en contra de la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso **RUC 2100531600-3, RIT N° 219-2022**, los que, en consecuencia, no son nulos.

**Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Llanos y Abogado Integrantes Sr. Gandulfo**, quienes estuvieron por acoger la causal de nulidad compartida por las defensas de lo encartados, con base en los siguientes fundamentos:

**1°)** Que, dado que los actos ejecutados por el agente revelador pueden llegar a constituir participación en un ilícito sancionado en la misma ley, el inciso final del mismo artículo 25 declara exentos de responsabilidad criminal al agente revelador *“por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma”*.

En efecto, la actuación del policía de adquirir, poseer, transportar, guardar o portar la droga, realizada “fuera” del contexto de una investigación dirigida por el Ministerio Público dentro de la cual éste ha autorizado su desempeño como agente revelador, importa una conducta sancionada por la misma Ley N° 20.000



en alguna de sus distintas figuras típicas, e incluso esa misma actuación ejecutada “dentro” del marco de una investigación “*doctrinariamente se ha entendido que se ajusta a una forma de instigación delictiva*” (SSCS Rol N° 2.958-12 de 6 de junio de 2012, Rol N° 31.242-14 de 29 de enero de 2015 y Rol N° 26.838-15 de 12 de enero de 2016). De ahí entonces, la trascendencia de cumplir con las formalidades dispuestas en la ley para demostrar la licitud de la actuación de los funcionarios policiales actuantes como agentes reveladores así como de la prueba obtenida por ellos (SCS Rol N° 21.427-2016, de 2 de junio de 2016).

**2°)** Que, en tal sentido y a fin de resguardar la licitud de la actuación de los funcionarios policiales actuantes como agentes reveladores, es que el inciso primero del artículo 25 de la Ley N° 20.000 dispone: “*El Ministerio Público podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores y, a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en alguna de las dos calidades anteriores*”.

La norma en cuestión es expresa en requerir que las policías propongan al Fiscal un agente policial para desempeñarse como agente encubierto o revelador y no admite, en esta situación, que sea la misma jerarquía de las instituciones policiales las que hagan tal nombramiento.

De esta manera, al requerirse la propuesta de la jefatura policial, la nominación del agente revelador sólo puede recaer en el representante del Ministerio Público, quién dentro de las posibilidades ofrecidas por la policía, designa a un funcionario “determinado” para el cumplimiento de dicha función, lo que reafirma la existencia de una acabada singularización del agente revelador por parte de Fiscalía, lo que no puede ser suplido o desplazado por una decisión del mando policial.

**3°)** Que, a mayor abundamiento, el Ministerio Público ha regulado de manera pormenorizada la materia a través del oficio FN 061/2009, mediante el cual imparte una instrucción general respecto de criterios de actuación en delitos



de la Ley N° 20.000, el que en su apartado 4.3. trata la actuación de los agentes encubiertos y reveladores, expresando que: *“De la designación de un agente encubierto o revelador debe dejarse constancia en la carpeta investigativa y entregar una copia a los policías que quedan a cargo de la misma./ La constancia deberá, al menos, contener los datos que permitan la individualización del agente encubierto o revelador, su nombre ficticio o clave con la cual se lo denomina, RUC del caso, policía a la cual pertenece, plazo de duración de la designación al cabo del cual caduca”*.

Lo transcrito deja de manifiesto la trascendencia que otorga el propio ente persecutor a su obligación de designar al funcionario policial que se desempeñará como agente encubierto o revelador, exigiendo que en el registro respectivo se incorporen aquellos datos que permitan individualizarlo, lo que no aconteció en la especie.

**4°)** En último caso, no puede dejarse de lado el deber de registro que pesa sobre Fiscalía en las decisiones investigativas que adopta, deber que impone la posibilidad de reconstruir el historial de diligencias dispuestas, por lo que dicho registro debe bastarse a sí mismo, contener los antecedentes suficientes para su adecuada inteligencia, deber que no resultaría satisfecho, sí se entendiera que una diligencia investigativa de excepción, como lo es el agente revelador, careciera de la singularización del funcionario policial a quien se ordenó cumplirla.

**5°)** Que de este modo, cuando los jueces del fondo valoraron en el juicio y en la sentencia que se pronunció los antecedentes derivados de la actuación que estos disidentes estiman ilícita, se incurrió en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que en este caso quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que



sólo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la diligencia censurada y la prueba de cargo obtenida, debe retrotraerse la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de los elementos de cargo obtenidos con ocasión de ella.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo de la Ministra Sra. María Cristina Gajardo Harboe y de la disidencia, sus autores.

**Rol N° 189864-2023.**

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H. y los Abogados Integrantes Sres. Raúl Patricio Fuentes M. y Eduardo Gandulfo R. No firma la Ministra Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios. Santiago, 30 de mayo de 2025.



En Santiago, a treinta de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

